



es inconstitucional por cuanto ella dice que rige desde su sanción.

Aunque el Poder Ejecutivo tiene la facultad para declarar que una ley ya sancionada por él es inconstitucional y la resolución citada no es por tanto viable, resultaría consignar aquí algunos argumentos en contra antes de probar que la Ley 34 de 1906 no es inconstitucional.

1º. La interpretación de la ley, con autoridad, solo corresponde al legislador (artículo 6º del Código Civil), y si esto es así tratándose de la ley, con mayor razonamiento que sección con respecto a la Constitución que es la base de la legislación nacional, de este modo lo entiende el Doctor Argarita cuando dice: "en el legislador reside de una manera *necesaria* la facultad de interpretar la Constitución".

2º. Al tratarse en segundo debate por la Asamblea Nacional el proyecto de ley "por la cual se deroga el parágrafo uno del artículo 73 de la Ley 95 de 1901" se discutió extensamente si tal proyecto era inconstitucional ó no, y se resolvó lo último desde luego que él fue aprobado; este hecho demuestra claramente que la Asamblea Nacional no procedió verdaderamente, sino que consideró que el proyecto no era inconstitucional, haciendo así uso del derecho que tiene tal corporación para interpretar *necesariamente* la Constitución, con autoridad sin que nadie pueda sancionarla; esta interpretación que los expresidentes llaman ambígua.

3º. Si la Asamblea Nacional consideró que la ley no era inconstitucional, también lo considero así el Poder Ejecutivo, pues teniendo como tiene éste la facultad de objeción las leyes que crea inconstitucionales, lo habría hecho con esta como lo ha realizado con alguna otra, y no se habría apresurado a sancionarla, como lo hizo cuarenta y ocho horas después de expedida. Este hecho demuestra evidentemente que el Poder Ejecutivo no considera inconstitucional la Ley 34 de 1906 dentro del término que la Constitución le concede para impugnarla por motivo y después, del cual no está facultado para cumplirla ó estudiar su cumplimiento.

Los anteriores argumentos dicen mucho en favor de la constitucionalidad de la Ley 34 de 1906; pero aun admitido que ella sea inconstitucional a todas luces, surgen de aquellas cuestiones:

1º. A qué funcionario ó corporación está atribuida por la Constitución la facultad de declarar inconstitucional una ley después de sancionada?

2º. Debe o no cumplirse una ley sancionada y promulgada que se ha llevado a la página con la Constitución?

La primera de estas cuestiones tiene que resolverse necesariamente en el sentido de que no hay en la República funcionario o corporación que tenga tal facultad.

La segunda cuestión tiene que resolverse alternativamente en vista del artículo 6º, de la Ley 153 de 1887, que dice:

"Artículo 6º Una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, y se aplicará aún cuando parezca contraria á la Constitución, etc."

Ni valdría argüir que el artículo copiado no rige en la República, una vez que está vigente por ministerio del artículo 147 de la Constitución, porque, en qué se oponen dichos artículos a la Constitución que como ley de derogatoria y reformatoria que es de la legislación preexistente podría haberlo derogado? En nada. Así lo ha

entendido uno de nuestros más distinguidos juristas consultor, el Doctor Vicente Morán, quien sostiene que la sanción de la Constitución de 1886 no le confiere la facultad de hacer lo contrario de lo establecido en el artículo 6º de la Constitución.

"Artículo 13. Cuando haya inconveniente entre una disposición constitucional y una legal, prevalecerá la ley.

En efecto, una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, y se aplicará aún cuando parezca contraria a la Constitución, etc."

Es claro como lo hizo del Sol que si la disposición contradicha en el artículo 6º de la Ley 153 de 1887 fuera contraria a la Constitución, hubiese caído en que estaría derogada por este notable condicionante no la habría conservado en el proyecto referido, porque ella sería entonces burla.

Por lo demás, el Poder Ejecutivo en varias ocasiones ha declarado inmediatamente vigente en la República el artículo 6º de la Ley 153 de 1887. Veámoslo:

Con motivo de unos nombramientos de Jueces Municipales, consignó en la nota respectiva una protesta el Juez 2º del Circuito de Panamá, por las siguientes razones:

"Artículo 6º. Porque dice que habrá contradicción entre las disposiciones de que trata el decreto legislativo número 19 de 1892 y el artículo 92 de la Constitución de acuerdo con el artículo 6º de la Ley 153 de 1887 esa contradicción no puede ser deuda cada ni por los jueces ni por el Secretario de Instrucción Pública y Justicia, antes bien debe caerse y el ejercicio de su mando con esa mala disposición."

Con referencia a este punto dirá el Secretario de Instrucción Pública y Justicia lo siguiente:

"El artículo 6º de la Ley 153 de 1887, citado por el señor Juez 2º, no es pertinente, pues éste tiene una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, etc." y el decreto expedido por la Junta de Gobierno Provisional al cual consistió el señor Juez 2º, que deben ajustarse los nombramientos de Jueces Municipales en el Circuito de Panamá, es anterior y no posterior a la Constitución."

De lo anterior se ve que la Secretaría de Instrucción Pública y Justicia consideró entonces que se establecía el artículo 6º de la Ley 153 de 1887, sólo que no era aplicable al caso porque las disposiciones arregladas por el Juez 2º del Circuito eran *anteriores* y no *posterioras* a la Constitución, como si lo es la Ley 34 de 1906.

Otra prueba de que el Poder Ejecutivo ha considerado siempre ejercitivamente las facultades mencionadas es que en tantas veces mencionado artículo 6º, de la Ley 153 de 1887, se tiene en los nombramientos de los suplementos de los Magistrados de la Corte, hechos en dos ocasiones de conformidad con el artículo 24 de la Ley 53 de 1904 que contiene una disposición expresa de ley posterior a la Constitución que es contraria al artículo 21 de la Constitución. Para hacer el Poder Ejecutivo dichos nombramientos en forma expresa, ha tenido necesariamente que basarse en el artículo 6º de la Ley 153 de 1887 y ha tenido por tanto que considerarlo vigente. No de otra modo podrían justificarse tales nombramientos.

En mérito de las consideraciones que anteceden, no es de dudarse que reconsiderarse la resolución de la Secretaría de Instrucción Pública y Justicia

que dice: "Artículo 6º de la Ley 153 de 1906 y que señala que el decreto de que se trata hace vacante la plaza de Juez de la Corte en el nuevo Proyecto de la Constitución no lo ha hecho en el momento en que la citada ley entra en vigor" es inmediatamente.

Pero esto debe manifestarse. Existe también señor, que si fin del precepto constitucional consignado en el artículo 6º, es garantizar la independencia del Poder Judicial, que es una de las ramas importantes del Gobierno, y que en todas partes merece respeto y acatamiento, de lo que por convención social colectiva deben cumplir los otros Poderes Públicos. El acto de justicia ejecutado por la Asamblea Nacional no ha tenido en tiente más objeto que hacer desaparecer en favor del Poder Judicial la única excepción que existía sobre resarcimiento de los sueldos asignados al servicio de los jueces.

Dedicarse en esta provisión que la Ley 34 de 1906 expidió por la Asamblea Nacional en sus recientes sesiones, y sancionada por el Poder Ejecutivo el 3 de Diciembre del presente año, "no comenzará a producir sus efectos sino cuando principien los nuevos períodos de los Magistrados y Jueces."

Esto se funda en que, en concepto del Ejecutivo, la Ley 34 de 1906 *anula* los sueldos de los empleados del Poder Judicial, cosa que forzosaamente aplaza sus efectos, aunque, por otra parte, esté *ejecutándose* su sanción, según las reglas generales, es decir, aunque sea ley de la República.

"Bien puesta la ley, dice Sampier, suprimir ó disminuir los sueldos de los Magistrados y Jueces; para la suposida o desincentiva no podrá llevarse a cabo, mientras subsistan en sus misiones 3 jefes judiciales los individuos que los están ejerciendo."

Si no veía Usía en la Ley 34 de 1906 una simple ley derogatoria del parágrafo del artículo 73 de la Ley 95 de 1901, sino la manera adoptada por el legislador para desviar un *aventuro* de los sueldos de los empleados del Poder Judicial.

En efecto, las asignaciones puestas a estos por la Ley 95 de 1901, consisten de dos términos que corresponden al ministro y el sustituto en una resta aritmética el residuo señala el monto de cada asignación. Quien *quiera vivir menos* debe *predicación ó sustracción del diez por ciento*, dice Usía. Esta resta constituye el sueldo líquido por actividad en cada caso lo expresa claramente el parágrafo contemplado: "Quedan [dice] los sueldos de los empleados en referencia [los del Poder Judicial] para el período para que han sido nombrados."

Sí pues, una nueva ley deroga dicho parágrafo, esto es, suprime uno de los términos que entrañan en la fijación de las asignaciones, ¿no es cierto que altera éstas? y no es cierto también que en cambio las altera, si éstas de la nueva ley no pueden ser igualadas sin pena de llevar el sueldo al campo constitucional?

El legislador no quiere, *no* puede querer ésta contra la Constitución, ya es la voluntad pecunaria del Estado y lo que éste está sometido los que tienen los mandatos de ella conforme a su criterio. Las declaraciones de la Constitución a sus ministros, sus términos, ordenaciones, y es ella misma la que impone a los servidores públicos la forma del juramento: Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución.

Todo acto emanado del Poder Legislativo debe sujetarse constitucional y aplicarse congruentemente con la Constitución, norma suprema de toda ley. Ya ha consignado que la *máxima* de esa aplicación toca determinar al Gobierno siempre que se trate de leyes del orden administrativo, que es el caso que se contempla.

Se aparta Usía de este criterio,

en la doctrina constitucional, ha creído que está dentro de la ley, atañiendo a la intención del legislador a las sanciones públicas, a determinar el pago del servicio público en el Poder Judicial.

Procede de aquí, la Resolución de este Despacho número 118 de 3 de Enero último, dictada a grana de punto para los empleados del orden judicial, en ejercicio de la facultad presidencial de determinar la manera como deben aplicarse las leyes administrativas (inciso 3º del artículo 71 del Código Político y Municipal).

Dedicarse en esta provisión que la Ley 34 de 1906 expidió por la Asamblea Nacional en sus recientes sesiones, y sancionada por el Poder Ejecutivo el 3 de Diciembre del presente año, "no comenzará a producir sus efectos sino cuando principien los nuevos períodos de los Magistrados y Jueces."

Esto se funda en que, en concepto del Ejecutivo, la Ley 34 de 1906 *anula* los sueldos de los empleados del Poder Judicial, cosa que forzosaamente aplaza sus efectos, aunque, por otra parte, esté *ejecutándose* su sanción, según las reglas generales, es decir, aunque sea ley de la República.

"Bien puesta la ley, dice Sampier, suprimir ó disminuir los sueldos de los Magistrados y Jueces; para la suposida o desincentiva no podrá llevarse a cabo, mientras subsistan en sus misiones 3 jefes judiciales los individuos que los están ejerciendo."

X no veía Usía en la Ley 34 de 1906 una simple ley derogatoria del parágrafo del artículo 73 de la Ley 95 de 1901, sino la manera adoptada por el legislador para desviar un *aventuro* de los sueldos de los empleados del Poder Judicial.

En efecto, las asignaciones puestas a estos por la Ley 95 de 1901, consisten de dos términos que corresponden al ministro y el sustituto en una resta aritmética el residuo señala el monto de cada asignación. Quien *quiera vivir menos* debe *predicación ó sustracción del diez por ciento*, dice Usía. Esta resta constituye el sueldo líquido por actividad en cada caso lo expresa claramente el parágrafo contemplado: "Quedan [dice] los sueldos de los empleados en referencia [los del Poder Judicial] para el período para que han sido nombrados."

Sí pues, una nueva ley deroga dicho parágrafo, esto es, suprime uno de los términos que entrañan en la fijación de las asignaciones, ¿no es cierto que altera éstas? y no es cierto también que en cambio las altera, si éstas de la nueva ley no pueden ser igualadas sin pena de llevar el sueldo al campo constitucional?

El legislador no quiere, *no* puede querer ésta contra la Constitución, ya es la voluntad pecunaria del Estado y lo que éste está sometido los que tienen los mandatos de ella conforme a su criterio. Las declaraciones de la Constitución a sus ministros, sus términos, ordenaciones, y es ella misma la que impone a los servidores públicos la forma del juramento: Juro a Dios y a la Patria cumplir fielmente la Constitución.

Todo acto emanado del Poder Legislativo debe sujetarse constitucional y aplicarse congruentemente con la Constitución, norma suprema de toda ley. Ya ha consignado que la *máxima* de esa aplicación toca determinar al Gobierno siempre que se trate de leyes del orden administrativo, que es el caso que se contempla.

Se aparta Usía de este criterio,



